

Editorial

La paz traicionada

No hubo celebración de los diez años de los acuerdos de paz. Naciones Unidas no consideró conveniente hacerse presente para dar por terminada la verificación de su cumplimiento por la elevación del tono de la confrontación entre ARENA y el FMLN, los mismos que, en su momento, firmaron dichos acuerdos. Ante el desplante diplomático, del cual sólo el gobierno de ARENA es responsable, éste decidió pasar la página y olvidarse también de éstos, así como ya se ha olvidado de las víctimas. El FMLN, por su lado, incapaz de resistir las nuevas tentaciones del poder, se ha debilitado, al sufrir una nueva división.

Dado que los sobrevivientes de la guerra se habían apropiado indebidamente del papel de protagonistas de la paz, relegando al olvido a las víctimas de las violaciones masivas de los derechos humanos, tal vez haya sido mejor dejar pasar la fecha sin conmemoración. De hecho, las víctimas no eran las únicas ausentes, en los preparativos para celebrar la fecha. También el pueblo, en teoría, el beneficiario principal de la paz, iba a ser dejado de lado. En realidad, siempre estuvo fuera, pues no participó en la negociación, sólo lo invitaron a la fiesta del 16 de enero de 1992. Diez años después, recibiría una invitación similar para celebrar algo cuyos beneficios son dudosos. Es por eso que una buena parte de la población se ha desentendido de la actividad política y otra parte significativa busca la manera de abandonar el país. Si El Salvador no puede honrar a las víctimas de su guerra civil y a las de la injusta sociedad actual, ni tolera la participación abierta y masiva de sus habitantes, en la determinación de su destino, tampoco está preparado para conmemorar los acuerdos de paz.

1. Una esperanza traicionada

El simple hecho de haber dado fin a la guerra y haber firmado los acuerdos de paz, independientemente de su contenido, despertó una esperanza

nueva, cuyo fundamento era el rumbo que el país parecía tomar, en aquel momento. El futuro inmediato, que hasta ese momento parecía imposible, sería muy distinto al pasado y al presente, todavía preñado de amenazas. De alguna manera, la nueva fase del proceso histórico salvadoreño, implicaba cambios sociales importantes para la vida de la mayor parte de la población. La inseguridad de la guerra desaparecería, las amenazas se esfumarían al perder su razón de ser y el abandono y la pobreza en los que había vivido por décadas serían reemplazados por tiempos de bienestar general. El discurso oficial recogió estas expectativas y las expresó como la fundación de un Estado y un El Salvador nuevos, transformado por los acuerdos de paz. La cultura de la guerra daría paso a una cultura de paz, entendida como el respeto a la vida y a la dignidad de todas las personas, el predominio del diálogo y la negociación para resolver los conflictos, el imperio de la ley y, de alguna manera, una mejor redistribución de la riqueza. Los presupuestos eran que al haber resuelto por medio de una negociación una guerra prolongada, sangrienta y cruel, se había sentado el precedente al cual, a partir de entonces, se recurriría para resolver conflictos futuros; la experiencia de la brutalidad de la fuerza descontrolada habría enseñado la ventaja de respetar los derechos humanos y la ley, y la destrucción causada por el enfrentamiento habría convencido de la necesidad de una estructura social más equitativa.

Diez años después, es evidente que, sin olvidar algunos bienes derivados de la finalización del conflicto armado, es poco lo nuevo y mucho lo antiguo que determina la realidad salvadoreña actual. Para la mayoría de la población, los acuerdos de paz no han significado una mejora sustancial en su nivel de vida. Las expectativas sociales de más envergadura no se han cumplido. En un momento determinado, se argumentó que la deteriorada situación económica, heredada de la guerra, no permitía avanzar más rápido en la eliminación de la pobreza. Al cabo de una década, sin embargo, este argumento no explica la pobreza actual, ni cómo ha sido posible que, en esas condiciones tan adversas, el gran capital haya crecido y haya dejado ganancias sustanciosas a sus propietarios. A quienes, a la vuelta de diez años, alegan que a los acuerdos no puede exigírseles el cambio social, porque su naturaleza es esencialmente política, hay que recordarles que sus protagonistas fueron los que más contribuyeron a crear esas expectativas insatisfechas. Si sólo se considera la materialidad del texto de los acuerdos, tendrían razón; pero, entonces, serían responsables de un gran engaño, puesto que alimentaron unas expectativas que sabían de antemano no iban a satisfacer.

En otros lugares de esta edición, dedicada a reflexionar sobre los acuerdos de paz, se estudia con más detención lo que fue de los compromisos adquiridos en 1992. Aquí nos ocupamos de algo más fundamental, nos preguntamos qué queda de la esperanza surgida a raíz de esos acuerdos. La respuesta se impone por sí misma, a quien tiene un mínimo de honestidad con la realidad nacional. Los resultados de los acuerdos se han quedado bastante

cortos, en relación con las expectativas despertadas. Crearon una esperanza que, sin lugar a dudas, fue traicionada.

Desconocer las ventajas derivadas del final de la guerra sería una necesidad, pero lo mismo hay que afirmar de quienes niegan las características que configuran la realidad actual. Es así como el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense, en su último informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en El Salvador, señala como áreas críticas al sistema judicial, a la Policía Nacional Civil y a una serie de discriminaciones y abusos contra los sectores sociales más débiles. Como es natural, el documento guarda las formas diplomáticas, reconoce avances o cita la Constitución y las leyes salvadoreñas, y luego señala las principales violaciones de los derechos humanos, observadas en el año 2001. La crítica a veces es directa y, por lo tanto, atribuible a esa dependencia gubernamental, pero, en otras ocasiones cita fuentes, a las cuales, sin duda, otorga credibilidad —de lo contrario, no las utilizaría para hacer sus señalamientos. El cuadro que este documento proporciona de la realidad salvadoreña con dificultad puede ser descartado alegando que está motivado por intereses políticos contrarios al gobierno actual.

Si bien el informe no trata en directo de la realidad económica, al final del mismo, hace una observación aguda y poco frecuente en esta clase de documentos. En lo que no puede ser si no una crítica al gobierno salvadoreño, Washington advierte que ARENA se concentra más en reducir la pobreza y promover la estabilidad familiar a través del crecimiento económico que gastando en programas para favorecer a la infancia. Según el gobierno de Estados Unidos, el sistema judicial salvadoreño es deficiente y corrupto. Este juicio priva sobre cualquier otro señalamiento positivo. Le echa en cara no respetar siempre el derecho de los imputados, no sancionar a los jueces y tolerar a aquellos que no poseen título profesional, y, más importante aún, lo acusa



de propiciar la impunidad de los ricos y poderosos. A la Policía Nacional Civil, aparte de reconocer algunos avances en la lucha contra el delito y los esfuerzos para depurarse, le atribuye abusos, asesinato, tortura, extorsión, secuestro, uso excesivo de la fuerza, mal trato a los detenidos y violación de la integridad personal. En algunos de estos señalamientos, Washington no observa mejoría entre el año 2000 y 2001. Son demasiados señalamientos y demasiado serios para una policía de un régimen que se considera democrático. Es obvio que las medidas adoptadas hasta ahora para mejorar su desempeño han sido insuficientes.

En las áreas problemáticas, el informe señala una larga serie de discriminaciones contra la mujer, los discapacitados, los indígenas y los homosexuales. La situación de la mujer y los niños ocupa un lugar destacado en los señalamientos. La violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, se encuentra extendida; la prostitución es común y hay indicios de que algunas mujeres y niñas son forzadas a practicarla; y existe tráfico de mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual. Por lo que toca al mundo infantil, el informe señala la desnutrición, el abuso físico y sexual, el abandono, la explotación y el descuido; un cuarto de las prostitutas del país es menor de edad. El trabajo de menores es un hecho aceptado. Finalmente, al referirse al mundo laboral, el informe observa que el Ministerio de Trabajo con frecuencia busca resolver los conflictos por medio de canales informales, en lugar de intentar aplicar la ley de manera estricta, la corrupción de los inspectores y de los tribunales laborales, y la falta de regulación especial para la maquila, cuyas trabajadoras se quejan de acoso sexual y mal trato físico, por parte de los supervisores. Washington considera insuficientes los esfuerzos de esa dependencia para resguardar los derechos de los trabajadores.

La opinión pública es un complemento que ilustra bien cuánto ha cambiado la realidad salvadoreña, a lo largo de la década 1992-2002. La población salvadoreña apoya de manera unánime la finalización del conflicto armado y, en este sentido, tiene una buena opinión de los acuerdos de paz. Sin embargo, esa unanimidad desaparece al valorar el impacto que este hecho ha tenido en sus vidas. Más de la mitad reconoce que el país está mejor ahora que antes, pero porque ya no hay guerra; pero otro grupo bastante significativo sostiene que el país sigue igual o ha empeorado, porque no ha habido cambios, porque hay violencia y crimen, porque la economía ha empeorado, porque hay más desempleo, más pobreza y la vida es ahora más cara. Por otro lado, mientras el discurso oficial aprecia la estabilidad democrática y el crecimiento económico como valores sociales primarios, la mayor parte de la población enfatiza la justicia social y económica, el respeto de los derechos humanos y la seguridad ciudadana. Esta contradicción se agudiza cuando se constata que para la mayoría, la democracia ha funcionado poco o algo. Es cierto que para esa mayoría la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, pero algo más de un tercio sostiene que le es indiferente si

el régimen es o no democrático. Más aún, esa mayoría prefiere el autoritarismo a la democracia. En consecuencia, la mayoría prefiere resolver los problemas por medio de la participación ciudadana, pero un grupo importante reclama mano dura. Opiniones similares se encuentran en la población menor de dieciocho años. Según los últimos datos disponibles, en El Salvador el apoyo a la democracia ha disminuido.

Diez años después, es evidente que, sin olvidar algunos bienes derivados de la finalización del conflicto armado, es poco lo nuevo y mucho lo antiguo que determina la realidad salvadoreña actual.

No deja de sorprender que, al cabo de diez años de un proceso que tenía como una de sus metas principales, precisamente, la democratización, ésta se encuentra desvalorizada para una buena parte de la población. La desvalorización de la democracia se confirma en la desconfianza generalizada en las instituciones nacionales. Llama la atención que las que menos confianza generan son aquellas instituciones que debieran promover, cuidar y practicar la democratización: el gobierno central, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos. Es indudable que la actitud de la población es pragmática, pero en ello hay un punto importante que no debiera ser pasado por alto: si la democracia no trae bienestar y seguridad, se vuelve irrelevante para la vida cotidiana de la gente. Dicho de otra manera, la democracia no es un valor abstracto, sino que, al igual que los demás valores, tiene un para quién y un para qué.

En efecto, la población entiende por democracia el ejercicio de derechos y libertades políticas, el bienestar social y la participación en los asuntos públicos. Si bien se puede afirmar que el ejercicio de los derechos y las libertades es universal en El Salvador —algo que sólo puede sostenerse con ciertas reservas—, no puede decirse lo mismo del bienestar general, ni de la participación en las decisiones importantes. De la misma manera, las instituciones que más confianza despiertan en la población son las iglesias, el ejército y las alcaldías. Las iglesias son como la última reserva de las expectativas que movilizaron a la población a esperar realidades nuevas, en 1992. El ejército y las alcaldías demostraron su disponibilidad para el servicio social durante los terremotos del año pasado. Los medios de comunicación, en cambio, han perdido terreno, en comparación con el aprecio del cual gozaban hace tres o cuatro años. Ahora son percibidos, sobre todo los que son propiedad de grandes empresas de la comunicación, como instrumentos al servicio del gran capital y del gobierno. Con todo, ninguna institución cuenta con la confianza absoluta (más de la mitad) de la población.

Es evidente, entonces, que tanto ARENA como el FMLN se equivocan cuando se atienen a la letra de los acuerdos, al evaluar sus diez años de existencia. Para el pueblo salvadoreño, éstos van más allá de un simple compromiso técnico, cuyo cumplimiento fue verificado por un organismo internacional. Aun cuando estos dos aspectos no deben ser menospreciados, su importancia no debe exagerarse como para perder de vista su fin último. Limitarse a la materialidad y al formalismo de lo acordado, es una coartada para quienes necesitan ocultar sus responsabilidades por no haber satisfecho la esperanza que suscitaron en la población hace diez años.

2. Unos acuerdos políticos para políticos

A esta crítica se suele responder, de manera equívoca, que se pide a los acuerdos de paz algo que no pueden entregar. Los acuerdos tendrían un carácter eminentemente político y serían el resultado de una negociación también política. Los negociadores renunciaron de manera expresa y consciente a comprometerse con cambios de orden económico y social; éstos habrían sido dejados a los avatares de la política. De hecho, ocho de los nueve temas de los acuerdos están referidos al régimen político, mientras que sólo uno está dedicado al tema económico. Así como los compromisos de naturaleza política fueron expresados con cuidado extremo, los económicos pecan por su vaguedad. Este contraste se explica porque en el campo político era donde estaba en cuestión la supervivencia de los grupos guerrilleros, que se convertirían en un partido político, así como también el control casi total del aparato estatal por parte del poder económico. De esta manera, aquéllos calculaban que conseguirían los cambios sociales que habían predicado durante la guerra por medios democráticos, mientras que estos otros se atrincheraron en las estructuras estatales para evitarlos.

Al renunciar a los compromisos concretos para introducir cambios importantes en la estructura social salvadoreña, los negociadores dejaron de lado los cuatro objetivos que ellos mismos se propusieron conseguir con la negociación y, en definitiva, con los acuerdos mismos. El Acuerdo de Ginebra, el primero de una serie, declara como propósitos del proceso de negociación que se iniciaría de inmediato poner fin al conflicto armado, impulsar la democratización, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Estos objetivos fueron recogidos en el preámbulo del Acuerdo de Paz, firmado en México, en 1992. Diez años después es obligado reconocer que sólo el primer objetivo fue conseguido plenamente, mientras que el segundo y el tercero sólo lo fueron de manera limitada. El cuarto no se ha conseguido, puesto que la sociedad actual se encuentra más fragmentada que antes, aunque es preciso reconocer que nunca estuvo unida. De ahí la necesidad de una reconciliación, para unir lo que ha estado separado desde tiempo inmemorial. Afirmar más es engaño, cuando no, también demagogia. La democratización actual se reduce a ciertas

libertades —sobre todo políticas, aunque las de información y expresión están restringidas. En El Salvador de hoy no se violan los derechos humanos como antes, pero su observancia no es irrestricta, sino que hay deficiencias graves, tal como lo señala el informe del gobierno estado-



unidense. Es innegable que la sociedad salvadoreña está atravesada por divisiones diversas. La más importante es la existente entre los grupos que reciben el mayor y el menor ingreso. Esta diferencia, en lugar de acortarse, aumenta cada vez más. De ella se derivan diferencias y conflictos sociales de toda clase, visiones encontradas y valoraciones opuestas de la realidad. Por lo tanto, no se trata sólo de unir a la sociedad salvadoreña, en cuanto a su pasado y las violaciones de los derechos humanos, sino que el obstáculo que hay que salvar es todavía mucho más grande.

No deja de sorprender que, al cabo de diez años de un proceso que tenía como una de sus metas principales, precisamente, la democratización, ésta se encuentra desvalorizada para una buena parte de la población. La desvalorización de la democracia se confirma en la desconfianza generalizada en las instituciones nacionales.

Este cambio en los objetivos se explica por la naturaleza misma de la negociación, de la cual es probable que sus actores no fueran del todo conscientes. No fue el deseo de construir la paz lo que los llevó a sentarse en la mesa de negociación, sino que, de por medio, hubo otros intereses ajenos e incluso contrarios a ella. En cualquier caso, la paz quedó subordinada a estos intereses. La negociación tuvo lugar entre dos elites, respaldada cada una de ellas por diversos sectores sociales, a los cuales movilizaron para pelear la guerra. Durante las negociaciones, estos sectores les sirvieron para defender su propia agenda (ver el artículo de E. Wood, en esta edición). Los términos de lo acordado establecieron, por un lado, unas reformas políticas que abrieron los espacios necesarios para que los rebeldes pudieran participar en la vida pública, a cambio de moderar sus demandas económicas y sociales, y, por el otro lado, dicha participación fue aceptada, a cambio de poder conti-

nuar con el proyecto económico del gran capital. Este buscó la finalización del conflicto armado cuando se convenció de que su prolongación era contraria a sus intereses económicos, los cuales ya estaban experimentando los efectos negativos de la guerra. Se llegó a un punto donde era más rentable, en términos de costo y beneficio, tolerar social y políticamente a los guerrilleros, que continuar el esfuerzo para eliminarlos. Por el otro lado, el final de la guerra fría, el empate militar y el que la insurrección popular con la cual el FMLN contaba para llegar al poder del Estado no se hubiera producido, llevaron a éste a buscar una salida política, la cual no estaba contemplada en sus planes originales, así como tampoco estaba contemplado el tipo de arreglo que la hizo posible.

Es así como la negociación terminó siendo política y, en este sentido, más orientada a satisfacer las demandas inmediatas de las cúpulas de las dos partes que de los grupos sociales que las respaldaron a lo largo del conflicto. De la negociación salió un nuevo acuerdo político, aceptable para ambas elites, pero no deseado por ninguna de ellas. En este acuerdo se fundamenta el nuevo régimen político, que, se supuso, sería democrático y contribuiría a la reconciliación social. De ahí que las partes concentraran sus esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos. Por eso, la evaluación que esas elites hacen de estos diez años de acuerdos de paz se centra en la dimensión política y, desde ella, consideran cumplidos los compromisos que adquirieron, juzgan un éxito los acuerdos mismos y creen que la democratización es una realidad en marcha.

Si se vuelve a los motivos originales del conflicto, pero sobre todo a sus causas mediatas, aparece de nuevo la contradicción entre lo político y lo económico social. En efecto, las causas mediatas que llevaron a la guerra son de orden económico y social, mientras que las inmediatas son de carácter político. La clase dominante, con el apoyo de los militares, cerró la posibilidad para acceder al poder a quienes lo buscaban por la vía electoral para, desde él, impulsar cambios económicos y sociales. El ideal que llevó a tantos jóvenes a las filas rebeldes y que los movió a disponerse a entregar su vida fue el de la justicia social. El conflicto terminó sin conseguir todo lo que se propuso. Los acuerdos fueron la respuesta a la causa inmediata, pero no a la mediata. Abrieron la posibilidad para que los reformistas pudieran acceder al poder del Estado, pero al mismo tiempo mantuvieron intacta la estructura injusta. El FMLN tiene a mano la disculpa de que esperaba obtener pronto el triunfo electoral que le diera el poder para, desde él, impulsar los cambios económicos y sociales. La experiencia demostró que su cálculo electoral era errado. Así como no hubo insurrección popular durante el conflicto, tampoco la población ha mostrado tener tanta confianza en él como para entregarle con su voto la dirección del Estado, aunque sí le ha otorgado una cuota de poder importante, en la Asamblea Legislativa y en el gobierno de los municipios más poblados. El tiempo ha demostrado que la desconfianza de la po-

blación tenía su razón de ser. En lugar de fortalecerse para luchar por sus ideales primigenios, el FMLN se ha debilitado por divisiones sucesivas. Todavía no ha podido comprender que para llegar al poder debe romper el círculo de sus militantes y ganar la confianza de una población que lo observa con recelo e indiferencia (ver el artículo de A. Artiga-González, en esta edición).

Aun cuando el FMLN estuviera decidido a ampliar el círculo de sus seguidores y simpatizantes, enfrentaría una dificultad estructural. Después del desencanto de los acuerdos, una buena parte de la población salvadoreña no está dispuesta a seguir otra vez a la elite de un partido político, sino que a una buena parte ya no le interesan sus planteamientos, mientras que otra pone distancia de por medio y abandona el país. Aunque fueron los seguidores de ambas elites los que les dieron el poder para pelear la guerra y para negociar su final, éstos no fueron invitados a la mesa, tampoco fueron tomados en cuenta en el cumplimiento de los acuerdos. Las elites asumieron gratuitamente que era un asunto que sólo les concernía a ellas, dado que se trataba del nuevo régimen político. Establecido éste, la exclusión continuó, porque los partidos políticos no han sido capaces de articular los intereses particulares que representan con el interés general. La manifestación más contundente de esta desconexión es la abstención electoral. La apatía y el desinterés de la población hacia lo político tienen, pues, una larga tradición, la cual es poco menos que imposible revertir de un día para otro, puesto que la población ha visto confirmada una y otra vez la incapacidad de los partidos para responder a sus demandas sociales y económicas concretas.

La responsabilidad histórica de trabajar para hacer realidad los ideales que llevaron a muchos a rebelarse contra el régimen autoritario es ahora más urgente que en 1992, porque entonces había esperanza y no había tanta desigualdad, ni el autoritarismo era tan evidente. El Salvador es un caso más donde la transición no ha llevado a la democratización, tal como la teoría política lo supuso, en un primer momento, y tal como fue recogido en los grandes propósitos de la negociación. La finalización de la guerra inició una transición que, apoyada en los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz, se supuso sería inevitablemente democrática. Todavía hoy, los intelectuales de las elites mantienen esta tesis, aunque con algunas variantes. Algunos de ellos hablan de una transición que avanza de manera muy lenta, debido a que encuentra obstáculos muy grandes, los cuales no se detienen a analizar. Sin embargo, el proceso conduciría de manera segura hacia la democratización. Si se detuvieran a analizar los obstáculos que impiden que el avance sea rápido, su juicio sobre la década de postguerra sería diferente. Otros más bien hablan de una consolidación progresiva, para lo cual se fijan en las ventajas de la ausencia de conflicto armado, ocultando la realidad social del país. Estos análisis no se atreven a hablar de democracia a secas, pero no dudan del carácter democrático de la transición. Esta certeza hace que el

proceso iniciado en 1992 no tenga un final previsible, en el tiempo. La transición de postguerra estaría abierta de manera indefinida. Los que así piensan, en el fondo, sólo están interesados en salvar a toda costa un proceso del cual se consideran protagonistas y en legitimar la posición de poder que detentan en la actualidad.

Desde una posición más realista, hay que admitir que del simple cumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos no ha surgido un régimen democrático, tal como se asumió con precipitación hace diez años, y que la transición no pone fin al autoritarismo, sino que ésta avanza arrasando consigo una cultura y unas conductas autoritarias. El cambio político no sólo trae novedades, sino que también conserva las viejas estructuras autoritarias. En el caso salvadoreño, el pasado pesa más que la novedad del cambio político, tal como lo reconocen de una manera velada los intelectuales de las elites, cuando señalan la existencia de obstáculos difíciles de salvar o hablan de consolidación progresiva. En ambos casos se desea la democratización, pero, en la práctica, ceden ante el autoritarismo, aceptándolo como un mal necesario.

Los acuerdos tendrían un carácter eminentemente político y serían el resultado de una negociación también política [...]

De hecho, ocho de los nueve temas de los acuerdos están referidos al régimen político, mientras que sólo uno está dedicado al tema económico. Así como los compromisos de naturaleza política fueron expresados con cuidado extremo, los económicos pecan por su vaguedad.

Los acuerdos abrieron espacios que la dictadura militar y la guerra mantenían cerrados, pero son espacios sin derecho. Una de las libertades más exaltada a la hora de mostrar las ventajas de la transición de postguerra es la de información y opinión, pero su alcance es limitado. Es cierto que hay más debate que antes, pero, según los medios, los temas y los participantes son seleccionados con mucho cuidado. Por otro lado, la ampliación del debate no ha sido acompañada de una mayor influencia en los procesos de decisión política, ni siquiera en el nivel local. Otra de las libertades apreciadas es la económica, pero también ésta es limitada. Goza de ella el gran capital, que dicta la política nacional, según sus conveniencias y sin cuya aprobación previa no es posible decidir en el área pública. Ni siquiera en la esfera estrictamente económica hay libertad, porque el capital funciona de tal manera que sólo los grandes obtienen ventajas y beneficios. La ley y la administración de justicia están al servicio de sus intereses, tal como lo señala el infor-

me del gobierno estadounidense. Debido a esta subordinación, la moral pública y el derecho han perdido su sentido y, en su lugar, predomina el poder del más fuerte, hasta el extremo que no parece haber límite para su voluntad, ni muestra sentimiento de culpa por los atropellos que comete. La reivindicación del límite que la ley y la moral imponen al poder de la voluntad del más fuerte no puede ser parcial y escindida, de modo que sólo afecte a unos, pero no a otros. Esto es lo que Washington echa en cara al sistema judicial salvadoreño, en el informe mencionado arriba.



Es así como la democra-

tización y la paz se han vuelto una coartada para ejercer el poder sin respetar el derecho y la moral. Pareciera que todo le está permitido por una voluntad superior que lo habría colocado por encima de estos últimos. Es así como el autoritarismo persiste en una transición que se dice democrática.

Hay que concluir, por consiguiente, que la tarea de los negociadores quedó inconclusa. Mientras no sea completada, la democratización real seguirá siendo un ideal abstracto. Esta deficiencia de la negociación es la que ha permitido conservar las viejas estructuras autoritarias del pasado y la que ha hecho que la transición se decante hacia el autoritarismo. Un modelo económico como el que implantaron los reformadores salvadoreños de los gobiernos de ARENA no se puede sostener si no es con un régimen autoritario, mientras que, los cambios políticos traídos por los acuerdos sí son compatibles con él, precisamente, porque está fuera de su alcance. A diferencia de los reformadores políticos, los económicos sí consiguieron lo que se propusieron. Revalorizaron el capital y con ello consiguieron una mayor acumulación y más riqueza, pero a costa de aumentar la desigualdad y la exclusión, lo cual no parece preocuparles en lo más mínimo, porque hace tiempo expulsaron la moral de la vida pública. En virtud de estas reformas, lo privado se ha ido

apoderando de lo público, con lo cual la población que se beneficia de los servicios nacionales ha quedado a merced de los designios del gran capital. El interés social y, por lo tanto, el bienestar general han sido desplazados por el interés de este pequeño grupo de grandes capitales locales y transnacionales. Ellos son los que detentan el poder real. Desde esta perspectiva, los acuerdos de paz fueron un mero instrumento para dar y consolidar estas reformas.

Si los acuerdos se consideran sólo bajo la óptica política, es razonable alegar que no se les puede exigir lo que no pueden dar; pero si la perspectiva es la de los grandes objetivos que los negociadores mismos se propusieron conseguir, atendiendo, en un momento de lucidez, al reclamo de una realidad nacional estructuralmente injusta, hay que sostener que los acuerdos no alcanzaron lo que se propusieron. Al haber dejado fuera a la justicia, la transición no pudo dar paso a la paz. El aumento de la desigualdad, el deterioro de las condiciones de vida y la exclusión cada vez mayor de la población de los beneficios del crecimiento económico y de las decisiones importantes que la afectan son argumentos de peso para quienes afirman que el proceso de democratización ha sido revertido. Es entonces cuando el gobierno y la derecha se escudan en el cumplimiento técnico de los compromisos adquiridos. De todas maneras, la salida no se encuentra en insistir en el cumplimiento de los acuerdos de paz. En la actualidad, éstos son ya una oportunidad perdida, como muchas otras. Ahora hay que ir más allá para intentar, por otros medios, alcanzar los mismos propósitos generales abandonados por falta de visión, por conveniencia y por egoísmo de las elites.

3. Las víctimas son las únicas que pueden traer la paz

Los acuerdos de paz ya son parte del pasado y, en cuanto tales, es indiferente, en estas circunstancias, si fueron o no cumplidos. En cuanto pasado, es imposible volver a ellos. Al no haber contribuido a que El Salvador se moviera con paso firme en la dirección de sus grandes objetivos, tal como éstos fueron planteados a su inicio, se perdió una buena oportunidad para hacer cambios sustantivos en la estructura social salvadoreña. En este sentido, no le falta razón al presidente Flores cuando se muestra decidido a pasar también esta página de la historia nacional, aunque en él es más una reacción inmadura al desplante que le hizo Naciones Unidas a su gobierno. Ir más allá de los acuerdos requiere, sin embargo, una aproximación diferente a la realidad y la intervención de nuevos actores, decididos a transformarla. Los que han intervenido hasta ahora, ya dieron de sí todo lo que podían dar y su aproximación ha probado de sobra sus limitaciones. Además, no parece que tengan la voluntad necesaria para ir más allá del cese del fuego y de la apertura del régimen político.

La oportunidad histórica abierta por la negociación y los acuerdos de paz se perdió porque los actores buscaban asegurarse cuotas de poder para im-

pulsar sus respectivas agendas particulares. Al predominar la perspectiva del poder, trasladaron al campo político la lucha que hasta ese momento habían librado en el campo militar. Los tiempos han cambiado bastante, pero no la mentalidad de los actores principales, la cual sigue anclada en el pasado. El campo político, en la actualidad, así como el militar, en otro tiempo, está marcado por líneas rígidas que separan a los propios de los contrarios; el objetivo primordial de la lucha sigue siendo la aniquilación de éstos, aunque esta vez utilizando medios políticos —sin embargo, está permitido el uso de toda clase de jugarretas. Los actores consiguieron lo que buscaban, pero la dinámica del poder se ha revertido en su contra, contribuyendo a su descrédito personal e institucional y a su deshumanización. Esto se ha convertido en factor de desengaño con el régimen salvadoreño y de deshumanización de la sociedad, en su conjunto.

Desde una posición más realista, hay que admitir que del simple cumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos no ha surgido un régimen democrático, tal como se asumió con precipitación hace diez años, y que la transición no pone fin al autoritarismo, sino que ésta avanza arrastrando consigo una cultura y unas conductas autoritarias.

La deshumanización personal e institucional de los políticos, la cual, a veces, es simple cinismo, está manifiesta en el desprecio a la tragedia que el conflicto armado trajo consigo. Una de las partes niega, mientras que la otra desconoce las propias violaciones de los derechos humanos, que causaron tantas víctimas inocentes. Ambas partes han olvidado ya a las víctimas de la guerra misma. Ni siquiera han tenido el valor de dar una reparación moral. El olvido y el desconocimiento hicieron posible que los actores de la negociación se apropiaran de los acuerdos de paz, como si lo que los hubiera movido a poner fin al conflicto armado hubiera sido su compromiso con la paz. Convirtieron los acuerdos en simples instrumentos para perseguir sus propios fines políticos. La paz debe mucho más a las víctimas que a quienes negociaron, firmaron y ejecutaron los acuerdos. El pueblo con un agudo principio de realidad así lo comprendió pronto y, por eso, se distanció de las conmemoraciones anuales de los acuerdos, las cuales acabaron convertidas en un deslucido acto gubernamental. Si las víctimas y el pueblo están ausentes, no hay nada que valga la pena conmemorar. Mientras aquéllas no sean reconocidas y honradas, El Salvador no estará preparado para conmemorar la finalización del conflicto, puesto que su derecho a la verdad y a la justicia es la fuerza real de la paz.

La perspectiva del poder, por consiguiente, debe ser sustituida por la de la construcción de una sociedad más humana y esto sólo es posible si la piedra angular de este nuevo edificio social está constituida por las víctimas del conflicto. Estas son las únicas con capacidad para conjurar las tentaciones del poder y las únicas que pueden contribuir positiva y creativamente a humanizar, porque sólo ellas tienen el poder para contrarrestar ambiciones, intereses y egosismos. Sólo ellas descentran a la persona, abriéndola a los otros, sobre todo a los que sufren y mueren de una manera injusta. Jon Sobrino advierte que la simple existencia de víctimas es la negación práctica de lo humano, porque éstas no han muerto, sino que han sido asesinadas y su asesinato permanece en la impunidad, prolongando así la humillación que sufrieron en su muerte. La víctima no es algo fortuito, sino que hay víctimas porque hay asesinos. Si éstos fueran perseguidos y sancionados, no habría más víctimas. El bienestar y la felicidad sólo pueden ser realidad ahí donde no hay víctimas. Entonces, si pudiendo evitar que se siga asesinando, no se actúa, es porque, en la práctica, no se desea eliminar la existencia de víctimas. Su existencia no sólo deshumaniza al asesino y a sus cómplices, sino también a la sociedad entera.

Las víctimas cuestionan, por lo tanto, sobre lo último de los seres humanos y al mismo tiempo interpelan, sin que sea posible escabullirse. Cuestionan el sufrimiento y la muerte, e interpelan, exigiendo una reacción. Las dos reacciones posibles son la negación y el desconocimiento, o la compasión. Hay tanto sufrimiento y tanta muerte, los cuales pudieron haber sido evitados, que la humanidad, y la sociedad salvadoreña no es la excepción, se ha acostumbrado a convivir con ellos e incluso a verlos con naturalidad. Esto sólo es posible cuando hay un alto grado de insensibilidad. Hay quienes incluso se alegran cuando las víctimas pertenecen al bando contrario —por sus ideas, religión, etnia, género y costumbres. Hay otros que hacen negocio con su humillación, alimentando el morbo de su audiencia. Las empresas mediáticas, sin ningún sentimiento de culpa, son uno de los instrumentos más eficaces para cultivar la insensibilidad, al presentar la información sobre el sufrimiento y la muerte humana de una manera tal que provocan esas reacciones de indiferencia, alegría o morbo. Esta operación es posible cuando se olvida que siempre se trata de seres humanos. El cultivo de la insensibilidad, que conlleva la deshumanización, es parte de un gran esfuerzo para encubrir la existencia de víctimas. Es como una especie de droga que saca de la realidad, tal como enfatiza J. Sobrino.

No obstante, el encubrimiento o la distracción no son totales; a veces, esos mismos medios permiten que el sufrimiento humano se cuele con tanta fuerza que es capaz de interpelar. La interpelación apunta a lo último de la realidad humana, la existencia de las víctimas. Es una pregunta por lo humano y por la convicción de que no se puede ser plenamente humano sin remisión al sufrimiento de las víctimas, lo último de la realidad actual. Su tragedia es un recordatorio de que quienes sufren y son humillados son seres

humanos. Si ya es un mal el que haya víctimas que podrían haber sido evitadas por medio de políticas públicas y con una conducta individual ajustada a las exigencias mínimas de la convivencia, el encubrimiento que provoca la insensibilidad hace el mal más grave. El mal, sin embargo, no es lo definitivo. Puede ser revertido, si el sufrimiento y la muerte mueven a la compasión, la cual no debe entenderse de manera pasiva. La auténtica compasión mueve a acompañar a la víctima en su sufrimiento, lo cual, ya de por sí, es una actitud activa, y a luchar para que no haya más víctimas. La interpelación de las víctimas no tiene escapatoria, ni encuentra justificación defendible: o se pasa de largo, mirando con indiferencia y desentendiéndose de la víctima, o se hace un alto para levantarla —tal como lo propone el evangelio, en la parábola del buen samaritano. Ignacio Ellacuría, al considerar a las víctimas desde una perspectiva colectiva y desde la compasión, las llamó pueblo crucificado, al cual, en consecuencia y coherencia cristiana, hay que bajar de la cruz.

La crisis actual, que la derecha atribuye a la pérdida de valores, es, en realidad, una crisis de humanidad. Lo humano como valor fundamental está ausente en las políticas públicas y en la conducta individual. Los otros valores no pueden desarrollarse, si falta lo humano, porque no encuentran suelo propicio donde germinar y florecer. Por eso es que la derecha no puede encontrar los valores que añora, en su conservadurismo, y que la izquierda ha perdido el norte, en su quehacer político. Sin embargo, las dos se muestran reacias a aceptar lo humano como valor fundamental y primero. Reconocerlo las forzaría a enfrentar la interpelación que las víctimas les lanzan desde su sufrimiento y su muerte, lo cual les debe parecer intolerable. En el fondo, su problema radica en su incapacidad para dejarse mover a compasión ante el sufrimiento de las víctimas. El carácter de ultimidad del sufrimiento y la compasión es incompatible con la absolutización del poder e incluso de la democracia. Sin dejarse afectar por el sufrimiento y sin reaccionar compasivamente, falla lo fundamental de ser humano, aquello que lo hace humano.

Las víctimas, su humillación y su muerte indefensa e impune, es lo que puede evitar la politización indebida de la vida pública y personal. Si las víctimas fueran el centro de las políticas públicas y de las decisiones personales, el egoísmo individual o sectorial y la búsqueda exclusiva de lo que lo favorece serían imposibles. Dicho de otra forma, ellas son las únicas con la fuerza capaz de romper la dinámica del poder y de los egoísmos, abriendo a la realidad humana. El Salvador tiene en su haber un ejército de víctimas de las violaciones de los derechos humanos y del conflicto armado mismo, así como también otra lista que se alarga cada vez más por causa de la injusticia institucional, que tolera a asesinos y violentos. Las víctimas no terminaron con la guerra. No debiera, pues, ser muy difícil dejarse mover a compasión para encontrar lo humano de la realidad salvadoreña. Entre esas víctimas figuran salvadoreños que se distinguieron por haber dedicado su vida hasta entregarla totalmente para evitar que hubiera más sufrimiento y muerte.

Mons. Romero, Rutilio Grande y los jesuitas de la UCA se encuentran entre ellas. La rectificación para encontrar el camino hacia la paz verdadera no debiera parecer una tarea imposible, cuando existen estos testigos tan cercanos de la entrega de la propia vida para hacer que lo humano sea realidad entre nosotros.

San Salvador, 3 de mayo de 2002.

